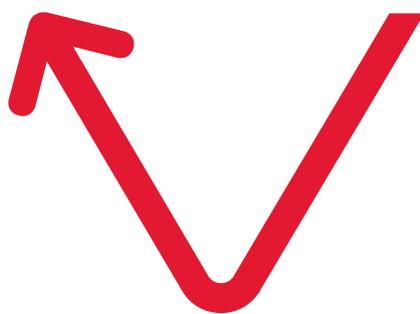




**AVANZANDO HACIA
LA REPÚBLICA**
Una IU para un nuevo país



Documento Político y Organizativo
de la XII Asamblea Federal de IU.
Ponencia de la Coordinadora Federal





Avanzando hacia la República

Una IU para un nuevo país

*Documento Político y Organizativo de la XII Asamblea Federal de IU.
Ponencia de la Coordinadora Federal*

1. Introducción

Han ocurrido una cantidad inconmensurable de acontecimientos desde la celebración de la XI Asamblea Federal en 2016. Tal y como señalamos entonces, estamos inmersos en un proceso de crisis que sigue sacudiendo las sociedades y acelerando los tiempos políticos. A las diversas expresiones de la crisis del capitalismo y la globalización se ha sumado una hasta entonces inédita: la sanitaria, como consecuencia de la pandemia global de la COVID-19. Han pasado muchas cosas en los últimos y frenéticos años pero, no obstante, seguimos en un momento de excepcionalidad que nos obliga al mayor de los aciertos en nuestra propuesta política.

Los retos son mayúsculos, pues afrontamos tiempos difíciles. En los últimos cuatro años la amenaza reaccionaria ha ido expandiéndose a lo largo y ancho del mundo. No se tratan solo de experiencias geográficamente lejanas como las de EE. UU. o Brasil, en la Unión Europea ya hay gobiernos explícitamente autoritarios, como el de Hungría, y formaciones de extrema derecha se han consolidado con índices muy preocupantes de apoyo, como en Francia o en Italia. España no ha permanecido ajena a este proceso de radicalización de la derecha y cuenta con gobiernos autónomos apoyados por una extrema derecha que está poniendo en peligro los derechos democráticos, cívicos y sociales.

El conjunto de la izquierda transformadora española afrontamos la ofensiva reaccionaria desde una posición paradójica de relativa fortaleza. A pesar de años sufriendo una campaña sin precedentes de acoso y derribo ostentamos una cuota de poder institucional y gubernamental inédita que se está traduciendo en la mejora de las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Sin embargo, nuestra capacidad de movilización social sigue siendo muy limitada en el actual ciclo político y muy lejos queda ya el empuje popular de los primeros años de la crisis económica. Debemos demostrar por la vía de los hechos que se puede gobernar de otra manera, esto es, poniendo las instituciones al servicio de la clase

trabajadora, pero nuestra acción institucional no puede entenderse separada de una sociedad civil robusta y organizada, articulada en torno a una nueva cotidianidad con espacios propios de socialización y fraternidad.

En la XI Asamblea señalamos las limitaciones que afrontábamos en Izquierda Unida de cara a la consecución de nuestros objetivos políticos como organización que, en algunos aspectos, devino en partido institucionalizado más que en movimiento político y social. Cuatro años después podemos hacer un análisis positivo, señalando avances como la mejora de los mecanismos de participación e instrumentos de transparencia (sufragio universal, primarias, referéndums, revocatorios...), la puesta en marcha de las redes de activistas como espacios de elaboración colectiva y conexión con el activismo, la adecuación de órganos para agilizar las dinámicas de trabajo o la austeridad económica para solventar la gravísima situación financiera en aras de una mayor independencia política y económica.

Sin embargo, hacemos un análisis autocrítico respecto a uno de los objetivos principales que nos marcamos hace cuatro años: la conformación de un espacio más amplio sostenido en instrumentos de elaboración, participación y acción colectivas que, en la praxis, supusiera la superación de las dinámicas partidistas de las distintas fuerzas del espacio conjunto. Aunque se han dado avances importantes, esto no ha sido posible en los términos que planteábamos por diversos motivos, entre ellos un ritmo político frenético marcado por seis elecciones, dos mociones de censura, la conformación de un histórico Gobierno de coalición y la propia pandemia, o las dinámicas particulares de las fuerzas que conformamos el espacio conjunto. Este análisis autocrítico no nos lleva a la renuncia de dicho objetivo, sino a la adecuación de este a la nueva realidad concreta en la que afrontamos la XII Asamblea Federal.

En esta dirección, apostamos por el refuerzo de Izquierda Unida como movimiento político y social para el fortalecimiento del espacio conjunto de convergencia. Una Izquierda Unida orgullosa de su bagaje histórico-cultural, con arraigo territorial y fortaleza municipal que, sin complejos, mantiene su apuesta estratégica por la construcción de espacios amplios y democráticos de convergencia que sirvan como cimientos políticos de la unidad popular. Apostamos, en definitiva, por reforzar la dinámica de trabajo de Izquierda Unida como movimiento político y social, no en clave corporativista, sino en la línea que sigue señalando nuestra razón de ser después de 34 años: la articulación de alianzas que, enraizando en la sociedad civil y en la cotidianidad de la clase trabajadora, va construyendo un nuevo proyecto de país.

Somos conscientes de que no soplan vientos favorables para la izquierda transformadora. El contexto en el que resituamos nuestra propuesta política es ostensiblemente más complejo que hace cuatro años. Sin embargo, no solo no renunciamos, sino que reforzamos nuestra apuesta por la ruptura democrática, que sintetizamos con precisión de la siguiente

manera: República Federal, Plurinacional y Solidaria. Para nosotros y nosotras, la República no es solo una forma de Estado que puede dar solución al problema territorial, sino un proyecto político muy amplio que debe conectar con todas las injusticias, los problemas y los anhelos de la ciudadanía para elevarlos al plano más importante, el del proyecto de país: una España republicana, más justa, más democrática, más igualitaria y más fraterna que servirá, en última instancia, para que las familias trabajadoras puedan vivir más dignamente.

No podemos decir que haya sido fácil. Tampoco podemos decir que hayamos alcanzado todos nuestros objetivos. Pero sí podemos decir que en los últimos cuatro años hemos conseguido avances importantes no solo para nuestra organización, que se encontraba en una situación muy delicada, sino también para las familias trabajadoras de nuestro país. Esto no habría sido posible sin el trabajo colectivo de los hombres y las mujeres que hacemos de Izquierda Unida una organización imprescindible en la construcción cotidiana de nuestro propio futuro. Un futuro socialista, feminista y ecologista.

Seguimos, juntos y juntas, avanzando hacia la República.

2. Crisis del capitalismo neoliberal y la globalización y crisis ecológica-planetaria

La crisis de la COVID-19 está poniendo de manifiesto, con especial crueldad, que el capitalismo es incapaz de resolver de forma satisfactoria los problemas que se le plantean hoy a la humanidad. No faltan recursos ni medios para atender las necesidades sociales y preservar el medioambiente, pero este sistema es incapaz de utilizarlos en beneficio de la mayoría de la sociedad. Es normal, pues en una sociedad capitalista los medios de producción solo tienen una finalidad: procurar el máximo beneficio en el menor plazo posible a sus propietarios, y no está dentro de sus objetivos abordar retos de otra índole.

Por eso su acelerado crecimiento, desarrollo y extensión ha ido acompañado de un incremento de la explotación de la clase trabajadora expresado en el aumento de la desigualdad y el insostenible expolio de los recursos naturales. Lógicamente las contradicciones se han agudizado hasta niveles extremos porque la expansión en esta fase del capitalismo ha ido acompañado de la instalación de la precariedad en la realidad cotidiana de la vida de la mayoría social. Si el sistema en el que vivimos no está en condiciones de garantizar unas condiciones de vida dignas a todo el mundo, aunque sí que demuestra eficacia a la hora de enriquecer a una minoría, el diagnóstico debería reconocer que una cosa es la condición de la otra. Y deberíamos sacar las conclusiones oportunas.

Una y otra vez experimentamos cómo el propio éxito del sistema le lleva a tasas de ganancia menores que no satisfacen a la ingente cantidad de capital que espera su retribución. La forma natural del capitalismo de atacar esa situación son las crisis que destruyen fuerzas productivas, buscando nuevos mercados e intensificando la explotación de los trabajadores para obtener más plusvalía. Eso es justo lo que está haciendo y, necesariamente, tiene unas consecuencias sociales y medioambientales desastrosas.

En España las transformaciones productivas que llevaron a la desindustrialización y a procesos de reconversión y desmantelamiento industrial fueron claves para la actual configuración de nuestro país como una economía periférica en la que reina el trabajo precario. En ese contexto el lugar de la economía española en la división internacional del trabajo queda a merced de la propia dinámica del libre mercado. Y dado el natural retraso de una economía capitalista como la española, el resultado es una desafección ciudadana ante las instituciones políticas, al ver cómo se permiten la deslocalización industrial y de libertad de capitales con la única finalidad de conseguir más rentabilidad. No puede abordarse el papel de la economía española en la UE sin tener presente estas consideraciones sobre el capitalismo mundial, muy desarrollado y con rasgos globales de sobreproducción, es decir, hay más fuerzas productivas de las que el capitalismo es capaz de utilizar. Eso conlleva, además, una enorme cantidad de dinero en busca de inversiones rentables, pero que no las encuentra precisamente por esa misma sobreproducción.

La crisis del capitalismo español no es sino la manifestación de la falta de espacios de rentabilidad económica para el capital, y el propósito del proyecto neoliberal es recomponer esos espacios mediante un proceso de empobrecimiento y mayor explotación laboral. Y cometeríamos un grave error si pensáramos que la crisis es el resultado de la epidemia de coronavirus. Ciertamente es un detonante que ha precipitado la situación. Pero un simple vistazo tras el escenario muestra que el periodo de crecimiento económico después de la crisis de 2007 ha dejado demasiada gente atrás y se ha instalado en la normalidad la precariedad como forma de vida. En definitiva, nos enfrentamos al shock económico que ha seguido a la pandemia, con una cuarta parte de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. En 2018 más de 12 millones de personas, que suponen más del 26% de la población española estaban en riesgo de pobreza y/o exclusión social y más del 5% sufría privación material severa. Y ni siquiera la COVID-19 formaba parte de nuestra realidad diaria. Todos los indicadores ya avisaban de que nos aproximábamos a una crisis, la COVID-19 solo la precipita y la generaliza. Sus efectos sociales muestran una economía orientada al beneficio a corto plazo que carece de las reservas para hacer frente a esta situación. La precariedad laboral es tan intensa que, ante una dificultad seria como la actual, la mayoría apenas tiene margen para resistir ni siquiera unas semanas.

Ha sido la clase trabajadora la primera que ha pagado sus consecuencias. Quienes están en situación más precaria se han encontrado sin recursos para vivir. Quienes dependían de la

economía sumergida o buena parte de quienes dependían de empleos precarios, se han quedado sin ningún ingreso. Quienes han pasado a depender de un ERTE para comer, han visto cómo sus ingresos se reducían y sufrían carencias materiales el tiempo que tardaban en cobrar las prestaciones sociales. De hecho, no tener ahorros impide a las familias trabajadoras hacer frente a las necesidades más básicas y como expresión más evidente hemos visto la proliferación dramática de las colas del hambre. Una vez más, quienes sufren en mayor medida las recesiones son los y las más vulnerables y se incrementa la brecha de la desigualdad. Mujeres, trabajadoras y trabajadores migrantes, personas de edad avanzada o jóvenes en general, y sobre todo aquellos con menos formación, van a sufrir los embates mayores de esta crisis.

Además, los trabajadores y trabajadoras de los servicios sanitarios han tenido que afrontar la pandemia sin medios humanos y materiales suficientes, ni los equipos de protección adecuados. Personal y pacientes han pagado en términos de vidas y en sufrimiento los recortes en sanidad pública de todos estos años. La expresión más macabra de la política de convertir los servicios públicos en negocio privado la hemos encontrado en las residencias de mayores, un lucrativo negocio privado que, si ya estaban en precario antes del coronavirus, con la enfermedad se ha generado una verdadera catástrofe. Con una sanidad y sistema de residencias públicos, con medios suficientes, se hubieran salvado muchas vidas. Sin embargo, los gobiernos de derechas se preparan para seguir privatizando la sanidad pública, mantiene unas plantillas insuficientes para atender las necesidades y en condiciones de precariedad.

Pero no nos quedamos únicamente en la denuncia. Apostamos por avanzar en el modelo de sistema sanitario y de políticas de salud que defendemos. Si nuestro sistema sanitario se organiza en tres grandes pilares, Atención Hospitalaria, Atención Primaria y Salud Pública, debemos denunciar que estas dos últimas han sido históricamente abandonadas, particularmente la Salud Pública, entre cuyas principales funciones está la vigilancia y gestión epidemiológicas.

La teoría de nuestro sistema sanitario, plasmado en las distintas leyes que desarrollan su estructura, hablan de la importancia de la prevención y la promoción, de la participación ciudadana, de un modelo integral de salud, de la importancia de atender los distintos determinantes de la salud (también los sociales), de la Atención Primaria como la base del sistema, etc. La realidad, plasmada en los medios y fondos que reciben los distintos agentes considerados, nos habla de un modelo asistencialista frente a un modelo basado en la prevención y la Salud Pública, hospitalocentrista frente al basado en la Atención Primaria, biologicista frente a un modelo integral de salud donde se dé relevancia a la salud mental y la social, con poca participación social frente a un modelo democrático y participado, que prioriza como factores de riesgo los estilos individuales de vida (tabaco, dieta, deporte) frente a los determinantes sociales y ecológicos (vivienda, trabajo, medio

ambiente); un modelo basado en un uso excesivo de pruebas diagnósticas y medicamentos frente a un uso racional de los mismos.

Así en las estadísticas de gasto sanitario público de 2018, la atención hospitalaria y especializada con un 61,8% y el gasto farmacéutico con un 16,2% constituyen las principales partidas, frente a un insuficiente 14,6% en Atención Primaria y un exiguo 1,1% en salud Pública. La crisis de la COVID-19 ha podido de manifiesto que es imprescindible reforzar la Atención Primaria y la Salud Pública para poder salir de esta crisis sanitaria.

Por otro lado, multitud de pequeños negocios también se han quedado sin ingresos o los han visto caer en picado, en estos meses. Y la situación se agravará con la necesidad de mantener las medidas de precaución contra la enfermedad y por la caída de los ingresos de la mayoría de las familias trabajadoras.

Hay dos alternativas. La que proponemos desde Izquierda Unida es audaz y pasa por acercar el nivel de provisión de servicios públicos y la recaudación fiscal a rentas y patrimonios elevados al nivel de la media de la Eurozona. Actuar de forma limitada, además de no abordar las políticas de impulso necesarias para proteger a la mayoría social y mejorar la vida de la gente, deteriora la estabilidad de las finanzas públicas y dispara la deuda. Se impone abordar una reforma fiscal justa, suficiente, equitativa y progresiva e incrementar nuestro ingreso público en casi 76 mil millones de euros para situarnos al nivel de la media de la Eurozona o más de 156 mil millones de euros anuales para situarnos al nivel de Francia. Hace falta tomarse definitivamente en serio el artículo 31 de la Constitución Española y la capacidad de abordar la redistribución y la capacidad de acción colectiva a través de las administraciones públicas. Dado que tenemos bienes comunes limitados y decrecientes, la única posibilidad de justicia es la distribución equitativa en el acceso a la riqueza. Porque luchar contra la pobreza es luchar contra la acumulación de la riqueza.

Apostamos por un Estado fundamentado en la justicia social. El artículo 31 de Constitución avala que quien más tiene más aporta, y la redistribución de la riqueza es necesaria hacerla desde las políticas sociales públicas, destacando entre ellas las políticas de servicios sociales. Por ello también es necesario blindar constitucionalmente los derechos sociales de la mayoría social y trabajadora para que no sean relegados a un segundo plano, por detrás del pago de la deuda externa, por ejemplo, impuesto desde modificación artículo 135.

Un avance en esta redistribución de riqueza y compensación de desigualdades que genera el modelo capitalista ha sido el Ingreso Mínimo Vital, un elemento clave para la lucha contra la exclusión social. Pero no hemos de olvidar que leyes como la de Atención a Personas Dependientes (Ley 39/2006, de 14 diciembre) necesitan la financiación suficiente para garantizar la atención a las miles de personas que fallecen cada año sin ser atendidas

teniendo el derecho a esta atención, o unas condiciones dignas para las personas cuidadoras. Tampoco nos olvidamos del desarrollo de Programas Específicos para la lucha contra pobreza infantil, con las medidas necesarias para erradicar las situaciones de riesgo de pobreza y exclusión en la infancia.

Por eso hace falta una mirada larga. Frente a la disputa entre propuestas neoliberales y keynesianas para afrontar las consecuencias de esta crisis, levantamos orgullosos la bandera de la transformación de la sociedad y el socialismo como la única forma de aprender del pasado y no caer en las trampas y chantajes que las élites dominantes nos han impuesto en crisis anteriores.

Ni neoliberalismo ni keynesianismo, la alternativa es el socialismo

No debemos permitir poner solo un paréntesis temporal al neoliberalismo, acudiendo al Estado para socializar pérdidas, para después exigir que la clase trabajadora pierda derechos y nivel de vida mientras el mercado acumula los beneficios privados. Aunque saludemos con entusiasmo que esta crisis no se aborde con las políticas de austeridad que caracterizaron lo que pasó hace una década, eso no es suficiente. No nos conformamos, porque creemos que es imprescindible tomar las riendas de nuestro futuro y para eso precisamos de más mirada colectiva, más estado y menos mercado. Un Estado social avanzado que democratice la economía de forma equitativa, justa y sostenible. Para impulsarlo es imprescindible una Banca Pública de verdad para que los ahorros de la sociedad depositados en las entidades bancarias se dirijan a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo.

En definitiva, tenemos que liderar las propuestas transformadoras planteando una salida de la crisis que no solamente ponga en la mesa propuestas asistenciales o de ayudas que dejen intacto el sistema.

En esta nueva forma de ver la economía, hay una nueva idea que surge con fuerza desde las propias filas del neoliberalismo económico, la Economía Circular, un nuevo concepto que, si bien se plantea para atajar la falta de recursos para producir, se está convirtiendo en una nueva forma de *Green Washing*. El sistema lineal obsoleto de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación), ha alcanzado sus límites. La sobreexplotación de los recursos naturales hace necesario un cambio real en los esquemas de consumo y producción. Está claro el agotamiento de una serie de recursos naturales, materias primas y más de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la economía circular debe proponer un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los flujos de materias primas, energía y residuos, y su objetivo debe ser tanto la eficiencia del uso de los recursos, como la no utilización de estos de forma innecesaria.

El concepto capitalista de producir de más para consumir de más ha llevado al planeta a un punto de crisis climática, que, de no modificarse, acabará por hacerlo insostenible para la vida. Para revertir el concepto capitalista, es necesario no solo una nueva forma de producir, sino también una nueva forma de usar los productos que generamos.

En Izquierda Unida consideramos la Economía Circular como el conjunto de medidas que nos permitan generar una sociedad más acorde y respetuosa con el medio ambiente, siendo este el fin de esta, y no el meramente económico, desarrollando un modelo en el que hagamos un especial hincapié en la forma de consumir actual, modificando el concepto mismo de personas consumidoras por el de usuarias. Para construir un modelo productivo en el que todo lo que diseñemos para la utilización personal o colectiva esté diseñado en parámetros de durabilidad, reutilización y reciclaje de todos sus componentes y la defensa del comercio de proximidad.

Y esa economía, que tiene que aspirar a ser sostenible ambientalmente y justa socialmente, tendrá que construirse no solo sobre las ruinas del viejo sistema, sino también con algunos de sus materiales convenientemente tratados. En ese sentido, sabemos que el camino pasa por construir un nuevo sentido común que prime lo de todos frente a lo de unos pocos, la cooperación frente a la competencia, la solidaridad frente al egoísmo, el Estado frente al mercado y a los de abajo frente a los de arriba. Toca unir los intereses de todas las clases subalternas frente a la dinámica perversa de un capitalismo que no solo es injusto, sino que amenaza, literalmente, la vida en nuestro planeta. Porque el capitalismo ignora la existencia de límites físicos en el planeta, cosa a todas luces absurda. Pero además invisibiliza los tiempos necesarios para la reproducción social cotidiana que, en los contextos patriarcales, son asignados mayoritariamente a las mujeres. No es casual porque eso contribuye a una explotación mayor. Dado que desconoce la existencia de límites físicos, se afana en crecer incluso a costa de la destrucción de lo que precisamente necesitamos para sostenernos en el tiempo y se basa en una creencia tan ilusa como peligrosa: la de que los individuos somos completamente autónomos e independientes respecto a la naturaleza y al resto de personas. Para que eso pueda ocurrir, es decir, para poder vivir “emancipados” de la naturaleza, de su propio cuerpo o de las relaciones con el resto de las personas hace falta que sean las mujeres, los bienes y ciclos naturales, otros territorios y otros pueblos quienes mantengan o quienes soporten las consecuencias ecológicas, sociales y cotidianas de esta supuesta vida independiente. En definitiva, para que el sistema funcione se impone una profundización mayor aún de la explotación. Y ese camino nos lleva a un callejón sin salida.

Todas las crisis son un marco en el que la pugna política e ideológica se acentúa, pasando a primer término los diferentes modelos de salida. Y por eso se hace más visible la ofensiva desatada por los diferentes sectores de las clases dominantes de nuestro país. Frente a ellos, es el tiempo de hablar de cooperación, producción, de lo público, de vidas seguras, de equidad y de justicia.

Ante esta pandemia global, los estados nacionales y los organismos supranacionales, especialmente la Unión Europea, van a poner en circulación considerables cantidades de dinero. Debemos aprovechar esta situación para impedir que, como en otras ocasiones, las ayudas no acaben saneando a la gran banca y grandes empresas sin contrapartidas para el Estado. Es vital que luchemos para que todas las ayudas del Estado al sector privado se hagan con condiciones, para evitar socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. Por eso en esta coyuntura se impone que triunfen las estrategias que proponemos para recuperar la posición central del sector industrial y los servicios públicos en el modelo de crecimiento económico y, con ello, afrontar de la mejor manera posible los restos que tenemos como sociedad. Y todo ello desde un decidido impulso desde lo público, único garante de que la reconstrucción industrial asegure los sectores estratégicos y nos pongan en la senda de una industria sostenible con empleos de calidad. Pero hay que hacerlo de manera compatible con la imprescindible transición ecosocial y afrontar de manera multidimensional la crisis global transformando la economía en sentido amplio.

Tal y como se indica desde el ecologismo social: la pregunta no es si queremos que el mundo cambie, porque el cambio está sucediendo. Debemos resolver si vamos a hacernos responsables de este para evitar que lo lideren las élites hegemónicas o vamos a hacerlo teniendo en cuenta que los seres humanos tenemos un suelo mínimo de necesidades que garantizan poder tener una vida digna y también un techo ecológico que no es razonable superar si no queremos correr importantes riesgos ecológicos.

Entre ese techo y el suelo de necesidades hay un espacio confortable y mucho mejor que el actual para la clase trabajadora. No hay otro obstáculo que las resistencias de quienes no quieren que haya cambios que les hagan bajar algún peldaño de donde ahora están. También la de todas las herramientas de las que se ha dotado el sistema para que no veamos otras recetas que las que no han funcionado, salvo para una minoría.

En Izquierda Unida reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la biodiversidad como elemento clave para la pervivencia de la especie humana y su bienestar en equilibrio con el resto de los seres vivos del planeta y de los ecosistemas que los cobijan. Creemos, por tanto, necesario dotar de la misma relevancia ambiental el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, dos problemas con un mismo origen y ambos trascendentales para el ser humano, siendo por tanto indispensables relacionar las políticas que se apliquen en ambos casos. La conservación de la biodiversidad debe estar ligada a acuerdos ambiciosos de reducción de gases de efecto invernadero, de eliminación de subsidios a los combustibles fósiles o a la creación de fiscalidad internacional a favor de la naturaleza.

Somos conscientes de que no se están abordando dichas causas en las políticas públicas al no existir acciones suficientes que cuestionen el actual modelo de producción y consumo. Por ello creemos que deben integrarse en el modelo las funciones y el valor de la

biodiversidad, y difundirlos en una sociedad como la nuestra con una percepción limitada del valor de la naturaleza y de los procesos y servicios que generan.

Apostamos por la implantación de una nueva fiscalidad ambiental socialmente justa que grave las actividades más perjudiciales para la biodiversidad y, en general, para el medio ambiente, de forma que esos recursos adicionales puedan ser utilizados en los ámbitos estatal y autonómico para impulsar las inversiones en conservación del patrimonio natural: Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, restauración de ecosistemas degradados. Apostamos por un *Plan urgente de recuperación y en defensa de la biodiversidad*, un verdadero revulsivo para la protección y la inversión en la recuperación de nuestra biodiversidad.

3. Mundo multipolar y desorden global tras la COVID-19

Tras la crisis económica mundial del capitalismo en 2008, de la que el planeta aún no se había recuperado, y en medio de una crisis ecológica también planetaria, la aparición en 2020 de la pandemia de la COVID-19 ha venido a poner aún más patas arriba al viejo orden económico y político internacional. Sus devastadores efectos están causando un inmenso drama humano y una crisis sanitaria y económica de consecuencias globales sin precedentes.

De esta manera, la crisis provocada por la extensión de la pandemia causada por la COVID-19 ha cuestionado los principios ideológicos del capitalismo, devaluado el poder de los EE. UU. y su capacidad de hegemonía sobre el resto del planeta. Ningún Estado mira hacia Washington como referente de las medidas a tomar para afrontar la emergencia pero, lo que es más novedoso, tampoco ha recurrido a los EE. UU. para pedir ayuda económica o sanitaria, como podía haber ocurrido en otros tiempos. Sin embargo, más de 80 países se han dirigido en este sentido a China, que sí está apareciendo ante los pueblos del primer mundo como un ejemplo para vencer la crisis médico sanitaria, sin olvidar que Italia ha pedido ayuda a Rusia y Cuba al margen de la Unión Europea, lo que genera una nueva dinámica en las relaciones internacionales que empieza a cuestionar el orden surgido tras el final de la llamada Guerra Fría.

El FMI, respecto a las perspectivas económicas para 2021, ha declarado que el sistema ha colapsado. Estamos en una recesión más grave que la de 2009 y para la que, de momento, no hay soluciones. La anhelada vacuna, a pesar de las inmensas inversiones públicas y privadas realizadas y dedicadas a la investigación, parece estar todavía lejos de convertirse en una realidad. Nunca ha sido más clara la necesidad de una mayor inversión de los estados en ciencia y en sanidad pública y de una respuesta global coordinada de acuerdo a la magnitud de la crisis. Sin embargo, el capitalismo, lejos de tomar medidas que enfrenten

la crisis, continúa fiel a su inercia egoísta y prefiere ignorar la gravedad de la situación como si esta fuera a arreglarse sola.

El futuro de Europa

Desde nuestro planteamiento de que la Unión Europea no representa a toda Europa, tenemos que seguir defendiendo un modelo de integración europea que tenga una base horizontal, solidaria, democrática, socialmente avanzada y que se plantee integrar a todos los pueblos europeos.

En este marco, señalamos que la Unión Europea, instrumento creado para profundizar las políticas neoliberales que tienen como objetivo adelgazar los estados hasta dejarlos en su mínima expresión, vive una crisis profunda especialmente desde la aprobación de las políticas de recortes en la crisis de 2008. La Unión Europea mantiene y asienta las asimetrías internas entre el centro económico y la periferia, y un modelo neoliberal profundamente injusto para las clases populares –especialmente a las mujeres y jóvenes– y el planeta. La crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales han sido la puntilla para un modelo agotado pero que resiste violentamente ante posibles alternativas.

Para España en lo concreto ha supuesto una acentuación de su rol de economía periférica, dada su debilidad estructural y un marco de competencia fiscal y laboral entre países cada vez mayor. No es una Unión solidaria, sino competitiva, cuya constante ha sido devaluar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Actualmente, la Unión Europea está en una crisis que se manifiesta en lo económico, pero también en lo político a través de fenómenos como el auge de la extrema derecha o el Brexit. Estos son, en buena medida, consecuencia directa de la aplicación de medidas de recorte de derechos, la imposición de gobiernos tecnócratas o de medidas antisociales, así como la asunción como propios de los discursos de la extrema derecha como, por ejemplo, en las cuestiones migratorias.

Hemos sido críticos históricos con el modelo de construcción europea, especialmente a partir de 1992 con la aprobación del Tratado de Maastrich, desde una concepción europeísta e y profundamente internacionalista. Nuestra prioridad es tejer alianzas y conseguir una relación de fuerzas que nos permita, en el ámbito europeo, construir un modelo compartido entre los pueblos de Europa y, de momento, avanzar en los cambios que beneficien a las clases populares como la exigencia de una política fiscal de redistribución de renta en la Unión Europea o una política migratoria respetuosa con el derecho humano a la migración y con la corresponsabilidad de todos los Estados en la gestión de un fenómeno provocado por el modelo de desarrollo dominante que provoca unas externalidades negativas en forma de guerras, conflictos por recursos naturales, cambio climático acentuado en el sur, etc.

En la coyuntura podemos afirmar que si de algo ha servido esta crisis es para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, declarase solemnemente que ponía fin al Pacto de Estabilidad que tanto daño y sufrimiento ha insuflado a las clases populares europeas. Esto supone que los Estados miembro que lo necesiten pueden superar el déficit del 3% y así elevar el gasto público para combatir los efectos de la crisis del coronavirus. El reto ahora es su supresión definitiva y la consecución de políticas audaces de inversión pública y redistribución de la riqueza para el escenario de reconstrucción.

Cabe señalar que esta crisis aparece en el marco de una transición geopolítica que ya había empezado a desplazar en gran medida el centro hacia el continente asiático. En ese contexto la Unión Europea, que representa el 7% población y 23% del PIB mundial, deberá afrontar el dilema sobre en qué lugar se quiere situar. Desde las fuerzas que defendemos unas relaciones internacionales y un desarrollo basado en el multilateralismo esto puede verse como una oportunidad de avanzar posiciones contrahegemónicas al 'statu quo', pero tampoco podemos olvidar que lo afrontamos desde una extraordinaria debilidad y con gran resonancia de los discursos insolidarios y autoritarios comandados por líderes como Bolsonaro, Viktor Orbán, Trump.

EE. UU. intenta volver a la Guerra Fría

La devaluación de los EE. UU., el fracaso de la Unión Europea y las disputas dentro de países capitalistas, de forma especial en los EE. UU., están provocando una situación de transición en el orden mundial con un declive del mundo unipolar surgido tras la caída del muro de Berlín y el avance de la globalización neoliberal, y la emergencia de un mundo multipolar.

De esta manera, el eje del Atlántico Norte que ha dominado el planeta no puede permitir que se constate que China ha respondido de mejor forma ante el coronavirus, y que el sistema político y económico chino está siendo más eficaz y solidario que el de EE. UU. y la Unión Europea para defender la seguridad de la ciudadanía.

En esta situación, los intereses capitalistas encabezados por el presidente estadounidense, Donald Trump, atacan duramente a China, buscando, entre otras cuestiones, recuperar un clima de guerra fría que les permita aumentar la presión militar y ejercer una mayor presión internacional hacia los Estados actualmente dependientes de los organismos económicos internacionales. EE. UU. necesita una política exterior agresiva, porque persigue el dominio de las materias primas y los

recursos naturales del planeta mediante la ocupación militar o el control colonial para mantener las altas tasas de beneficios de las empresas multinacionales.

El gobierno de Trump, acosado por una gestión nefasta de la crisis sanitaria y cercado por movilizaciones sociales como las relacionadas con el movimiento 'Black Lives Matter', no se ha cansado de señalar a China como la potencia rival en auge que amenaza su hegemonía. Desde la OTAN y el Departamento de Estado de los EE. UU. se ha afirmado que estamos entrando en una nueva guerra fría, en una nueva etapa histórica dominada por dos grandes potencias que competirán por imponer sus modelos sociales antagónicos. Jens Stoltenberg, Secretario General de la OTAN ha dicho recientemente que el ascenso de China representa una amenaza para la seguridad occidental, que altera el equilibrio global de poderes y que la OTAN es consciente de que es el segundo país del mundo que más gasta en defensa y no comparte nuestros valores. El crecimiento económico de China se ha convertido en una amenaza comercial para EE. UU., que también le ha declarado la guerra tecnológica. El proyecto estratégico de China, la Nueva Ruta de La Seda, basado en la construcción de acuerdos comerciales de mutuo interés y cooperación, ha ido sin embargo ganando simpatías y adeptos, firmando acuerdos comerciales con muchos países.

Respecto a Rusia, hace años que EE. UU. desarrolla en las fronteras orientales de Europa una estrategia envolvente de intromisión en muchos países con el objetivo de llegar a rodear a Rusia en su propia zona regional de influencia intentando llegar lo más cerca de sus fronteras estableciendo gobiernos afines a los intereses imperialistas y aliados de los EE. UU. donde el objetivo norteamericano es ampliar los socios de la OTAN y poder establecer lo más cerca de Rusia tropas de la OTAN. El despliegue militar de EE. UU. en el Este de Europa busca derrotar el proyecto estratégico ruso de recuperar aliados políticos en las antiguas repúblicas soviéticas.

Palestina, Sáhara y Siria

Izquierda Unida como fuerza profundamente antiimperialista e internacionalista en el apoyo a la lucha de los pueblos, apostamos por un mundo multipolar y nos sumamos por ello a los trabajos de la Asamblea Internacional de los Pueblos que será importante en el futuro en la movilización mundial contra las guerras y el dominio de los pueblos que persigue el imperialismo.

Especialmente, queremos destacar la lucha de los pueblos de Palestina, Sáhara y Siria por su libertad y autodeterminación, que merecen toda nuestra solidaridad. El Sáhara Occidental y Palestina como pueblos ocupados ilegalmente tienen todo nuestro apoyo y reclamamos a Marruecos y a Israel la desocupación de estos territorios, y en el caso del Sáhara Occidental un referéndum de autodeterminación. Respecto a Siria, y una vez ha terminado la guerra de más de nueve años que ha destrozado pero no derrotado a la soberanía de ese país, debemos apoyar su urgente reconstrucción y promover el restablecimiento y normalización de relaciones fraternales y diplomáticas con otros países del mundo, empezando por el nuestro. Rechazamos por ilegales e injustas las sanciones que EE. UU. ha aprobado contra Siria. De la misma manera,

destacamos la lucha del pueblo kurdo de Rojava y su revolución ecofeminista que ha sufrido y combatido con éxito al fascismo de corte islamista que azota la región.

América Latina: restauración conservadora, golpes de Estado y ‘lawfare’

Debemos situar la recuperación de la doctrina Monroe en el objetivo de los EE. UU. de regresar a una situación de guerra fría y e intentar recuperar el control de lo que siempre han considerado como su patio trasero, como paso indispensable para poder volcar todo su potencial en consolidar un bloque cerrado, colonizado económica y militarmente.

De esta manera, en América Latina el imperialismo de los EE. UU. y las oligarquías han vuelto a los golpes de Estado contra gobiernos populares de izquierda y al juego sucio antidemocrático contra dirigentes de izquierda. En los últimos años hemos asistido a golpes de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, Nicolás Maduro en Venezuela, Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia. Unos han triunfado, otros afortunadamente no. Al mismo tiempo, el imperialismo está aplicando nuevas estrategias de criminalización contra estos líderes de izquierda combinando campañas de desprestigio a través de los grandes medios de comunicación neoliberales con montajes judiciales urdidos desde jueces cooptados para criminalizar y perseguir a estos dirigentes. Es la aplicación de la ‘lawfare’ o guerra judicial contra dirigentes honestos que pretende eliminar al oponente político, mantenerlo en la cárcel o en el exilio, y acabar con sus proyectos políticos.

Mantenemos nuestro firme compromiso con los gobiernos progresistas y apostamos por procesos electorales limpios en los países acosados por el imperialismo y la reacción interna. Igualmente, desde nuestro compromiso internacionalista reafirmamos nuestro compromiso con la lucha del conjunto de pueblos y movimientos sociales de América Latina que siguen haciendo frente desde la lucha y la resistencia a las políticas imperialistas de violencia y despojo.

4. La crisis de régimen y nuestro proyecto de país: avanzando hacia la República

En la XI Asamblea Federal situamos la crisis de régimen del sistema surgido de la Transición como el eje central de la realidad política de nuestro país. Entendíamos que los principales consensos que articulaban su hegemonía se habían roto y esto nos obligaba a entender la excepcionalidad que, todavía en 2016, seguíamos viviendo.

La crisis económica de 2008 supuso un grave deterioro de las condiciones de vida de la mayoría social, no solo de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables sino de

amplios sectores medios, hasta entonces integrados en el bloque de poder a través del consumo y la propiedad, especialmente la vivienda. Se rompió así el relato del ascensor social: por primera vez en décadas las generaciones jóvenes vivirían peor que sus padres.

Uno de los datos más significativos de las consecuencias de la crisis fue la pérdida de población en España: entre 2010 y 2015 el saldo migratorio total (la diferencia entre las personas que salían respecto a las que entraban en el país) fue negativo. Esta nueva oleada migratoria, formada mayoritariamente por inmigrantes que habían obtenido la nacionalidad y regresaban a sus países (o marchaban a otros), personas de clase trabajadora, empleados públicos y profesionales cuyas perspectivas se habían visto truncadas a causa de los recortes, se atenuó en los años siguientes, pero nunca desapareció del todo, pues aumentó el número de ciudadanos españoles residentes en el exterior de poco más de un millón antes de la crisis a cerca de 2 millones y medio en 2020.

Esta crisis posibilitó un proceso de cambio cultural que acabó encontrando su colofón en el movimiento 15-M, el mito fundacional de la nueva España posible que se abrió paso mediante expresiones muy diversas, desde movilizaciones sociales con solidez ideológica-programática a protestas «antipolíticas» más primarias. Una nueva mayoría amplia, sin arraigo ideológico profundo pero con sensibilidad constituyente, se erigió como el sujeto político del cambio. En los años posteriores, 2012 y 2013, se produjo un auge de la movilización social sin parangón en las últimas décadas.

La traslación política-institucional del proceso de cambio, y tras un incipiente agotamiento de la movilización social, se produjo –en parte– en 2014 y 2015. El sistema político sustentado en el turno bipartidista saltó por los aires. No solo se trataba de una crisis de representación parlamentaria; esta estaba estrechamente ligada con la crisis de la organización territorial del Estado, del Estado de las Autonomías a la monarquía.

Hablamos de crisis de régimen porque se rompieron los principales consensos en torno a los cuales descansaba la hegemonía del bloque de poder: el económico-social, el cultural, el político-institucional y el territorial-estatal. Los primeros años de la crisis, esto es, hasta 2015, la crisis de régimen giró principalmente en torno a la cuestión económica-social y su respuesta democrática y popular, lo que ensanchó el campo de acción de la izquierda. No es casualidad, pues, que esta alcanzara sus mejores resultados históricos desde la II República en 2015 y 2016.

Sin embargo, en 2016 se produce un «impasse» y un decaimiento posterior tras la acumulación del agotamiento de la movilización popular y la merma de las expectativas una vez frustrada la posibilidad de un cambio profundo y real. En 2017 la ruptura de la costura territorial en Cataluña supuso la consolidación de la cuestión territorial y nacional como eje central sobre el que giraría la crisis de régimen. Solo un año después, habiendo sido

expulsado el Partido Popular del Gobierno tras una moción de censura exitosa, irrumpió Vox tras un laborioso trabajo social y cultural previo.

Desde entonces, los posicionamientos del escenario político están definidos por una polarización entre los bloques de izquierda y derecha, liderado el primero por un PSOE que, tras la moción de censura, reconquistó su posición preeminente en la izquierda, reforzada además por la confrontación inherente de la extrema derecha. Esta recomposición del escenario político se consolida en 2019 tras un bloqueo que se traduce en una repetición electoral y, posteriormente, la conformación del primer Gobierno de coalición de izquierdas desde la II República.

El Gobierno de coalición es expresión de una situación paradójica del conjunto de la izquierda. Esta cuota de poder institucional y gubernamental inédita se conquista en un momento de reflujo y ofensiva reaccionaria, esto es, en un momento en el que las derechas están liderando la lucha cultural y social desde posiciones, en demasiadas ocasiones, antidemocráticas, impregnadas de odio, racismo y machismo. Esta ofensiva se enmarca en la evolución y el desarrollo de la crisis de régimen, como decíamos, hacia la cuestión territorial, nacional y estatal.

Las reacciones y los ataques al Gobierno de coalición ponen de manifiesto que hoy la crisis de régimen es, principalmente, una crisis de Estado. Si en los primeros años de la crisis las principales batallas se libraban en el ámbito social, hoy se libran dentro del ámbito institucional-estatal. El aparato judicial ejerce, desde hace dos años, de vanguardia de la oposición, intentando llegar donde los partidos de las derechas no pueden llegar. Asimismo, asistimos desde hace años a una lucha entre los distintos aparatos y las distintas facciones del Estado. Este expresa la correlación de fuerzas dentro del bloque de poder y, al mismo tiempo, ejerce como organizador estratégico de los intereses de las distintas facciones que conforman dicho bloque.

La disgregación de las élites catalanas del bloque de poder, la oscilación del apoyo económico y mediático a unos partidos de la derecha u a otros dependiendo del momento o la lucha entre diferentes aparatos estatales son síntomas de las dificultades del Estado a la hora de unificar estratégicamente los intereses corporativos de las clases y facciones del bloque de poder. Pero la crisis de Estado no se expresa únicamente hacia dentro. A la crisis territorial-institucional, con manifestaciones diversas como la plurinacionalidad y la España vaciada y rural (interrelacionadas, pues en las naciones históricas también encontramos zonas despobladas y rurales) y el centralismo como eje de la crisis nacional española, se suma la crisis de una monarquía corrupta que es sinónimo de pasado.

En el actual momento político nos encontramos con dos modelos en disputa para dirigir la evolución y posible resolución de la crisis de régimen en la que nos hayamos inmersos desde hace ya más de una década. Por un lado, tenemos a un bloque reaccionario que,

incapaz de sostenerse con el largo aliento del régimen de 78, trata de recomponerse para garantizar una salida en clave de ‘revolución pasiva’ que mantenga intactas las estructuras de poder de las élites dominantes. Las derechas, aunque fragmentadas en lo electoral, presentan un programa común que gira en torno a una salida autoritaria, neoliberal, recentralizadora y patriarcal, con un exacerbado nacionalismo español que envuelve y encubre su modelo económico, político, social y cultural.

Enfrente tenemos un bloque democrático en el que nos insertamos que trata de evitar el cierre autoritario de la crisis de régimen. Para ello, por un lado, es fundamental consolidar el bloque institucional que propició la moción de censura y que, dentro del escenario marcado por el pluralismo político, sea capaz –como primer paso– de materializar las medidas contenidas en el programa de Gobierno de coalición firmado por Unidas Podemos y el PSOE. Por otro lado, es fundamental el fortalecimiento de la movilización social y popular para impedir el cierre de la crisis de régimen por la derecha mediante la consolidación de una base social democrática. El nuevo ciclo de movilizaciones vino marcado, hasta la irrupción de la pandemia, por el surgimiento con fuerza del movimiento feminista o el de los pensionistas, así como la proliferación de una multitud de conflictos sectoriales estrechamente vinculados a las insuficiencias del modelo capitalista de nuestro país para garantizar unas condiciones de vida dignas a la población.

No es casualidad que las derechas hayan puesto en el punto de mira de sus campañas del odio a muchas de estas movilizaciones. Su agresividad con el movimiento feminista o su campaña de desinformación con respecto al derecho a la vivienda digna son buena muestra de ello. En este sentido, es necesario contraponer a la agenda de las derechas, que encubre las medidas neoliberales regresivas para el bienestar de las capas populares de nuestro país, otra agenda que se centre en el alivio de los problemas reales de la mayoría social, que ponga en el centro las luchas de la clase trabajadora organizada, del movimiento feminista y del movimiento ecologista, claves para entender los límites actuales del capitalismo. La crisis provocada por el coronavirus se ha mostrado especialmente útil para evidenciar esas contradicciones, pues ha puesto frente al espejo las profundas desigualdades sociales, económicas y de género en el marco de un modelo ecológicamente insostenible en términos globales.

En cualquier caso, debemos tener presente que nos encontramos en el inicio de una crisis económica mundial con devastadoras e imprevisibles consecuencias en lo social, que puede afectar especialmente en España por la debilidad de nuestro modelo económico y nuestra inserción dependiente en el capitalismo europeo. Es posible que los cambios sean profundos a todos los niveles (económicos, sociales, ideológicos, etc.) y no podemos permanecer ajenos a esa posibilidad. No puede ocurrirnos como en la crisis del 2008, donde creímos que no había que hacer revisión de los planteamientos vigentes, ni era necesario adoptar grandes cambios en nuestra forma de hacer política en todos los sentidos. Por lo tanto y teniendo en cuenta que estos son los principios que han de regir

nuestra acción política, debemos reaccionar con agilidad, en un escenario tan complejo, de la forma más adecuada si la situación lo requiere.

Uno de los grandes retos de la izquierda transformadora que representamos es consolidar las posiciones institucionales a la vez que se fortalecen y amplían las alianzas políticas y sociales. Para ello, es imprescindible ampliar la base social y político-organizativa para combatir las ofensivas de las derechas y ser capaces de avanzar en la materialización de medidas capaces de subvertir el orden económico, político y social existente, manteniendo abierto el horizonte de ruptura democrática que nos dirija hacia un nuevo proyecto de país republicano.

Por lo tanto, es imprescindible que sepamos dirigir los esfuerzos en ambas direcciones y concretar bien los tiempos y los pasos a dar en cada uno de ellos. Sabemos que para hacer frente a la agenda reaccionaria y lograr que valores como la solidaridad, la justicia o la igualdad sean hegemónicos, condición imprescindible para cualquier cambio real, no nos podemos limitar a las posibilidades que nos otorga el marco institucional en la actual coyuntura. De lo contrario, si enmarcamos exclusivamente nuestros objetivos al ámbito institucional no conseguiremos la acumulación de fuerzas necesaria que requiere nuestra apuesta democrática de cambio. Somos conscientes de las contradicciones que esta situación nos puede generar, pero como movimiento social y político dichas tensiones son consustanciales a nuestra naturaleza y no deben paralizarnos.

Objetivos estratégicos del Gobierno de coalición

Partiendo de la reflexión anterior, planteamos cinco objetivos estratégicos que el Gobierno de coalición debe asumir como propios:

- 1.** Poner en marcha políticas que mejoren las condiciones de vida de las familias trabajadoras

Tras una década perdida marcada por los retrocesos y la pérdida de derechos, el Gobierno de coalición debe consolidar una nueva etapa en la que demuestre que hay alternativa a las políticas neoliberales. La mejor manera de enfrentarse a la crispación de las derechas es revalorizar la política, y esto solo será posible si demostramos que esta puede ponerse al servicio de quienes vienen cargando sobre sus espaldas con las consecuencias de la crisis. Una buena agenda legislativa nos permitirá ensanchar nuestro margen de maniobra política y estrechar alianzas imprescindibles para garantizar la estabilidad del Gobierno y el cumplimiento de su acuerdo programático.

2. Reforzar la batalla cultural que reconstruya el sentido común

No bastará solo con una buena gestión de gobierno desde criterios ‘objetivos’. Toda la acción de gobierno debe tener el objetivo transversal de avanzar culturalmente hacia posiciones democráticas y progresistas. El avance de la extrema derecha solo se puede entender a partir de la lucha cultura en el conjunto de la sociedad civil que posteriormente su avance político-electoral. El Gobierno y sus instituciones nos dotan de posiciones privilegiadas para ‘desintoxicar’ el ambiente –cargado de sentimientos negativos y valores reaccionarios– del que se aprovechan las derechas. La acción de gobierno no se medirá tanto en términos administrativos como en términos culturales: será exitoso si es capaz de redirigir el sentido común en una dirección progresista que acompañe la puesta en marcha de políticas transformadoras ambiciosas.

3. Avanzar en la construcción de un nuevo país: una nueva idea de España y un nuevo proyecto de Estado

Venimos analizando que la crisis de régimen viene marcada durante los últimos años por la primacía del eje territorial-nacional, primacía que es aprovechada por las derechas para avanzar desde posiciones nacionalistas. Frente a la idea reaccionaria de España, estrecha y homogeneizadora que imponen las derechas recogiendo el hilo azul de lo peor de nuestra historia, debemos ser capaces de desarrollar un proyecto integral de país. No existe una dicotomía entre la ‘cuestión social’ y la ‘cuestión nacional’, aunque tengamos dificultades históricas en la segunda. Debemos conseguir que una España diversa, plurinacional y democrática sea posible y deseable para la mayoría de la ciudadanía. Esta solo será posible si la acompañamos con la democratización del Estado modificando su ‘selectividad estratégica’, esto es, democratizando algunos de sus aparatos como el judicial.

4. Fortalecer el espacio conjunto de convergencia y las dinámicas de trabajo conjunto

El Gobierno necesita un soporte político-organizativo sólido para poder resistir a los ataques de una oposición en posiciones ultras y las propias contradicciones inherentes a un reto de estas características. En la línea de los objetivos que nos marcamos más adelante como organización política, el Gobierno debe servir como acicate para la cohesión y la coordinación estratégica del espacio de Unidas Podemos y de las fuerzas que lo conformamos.

5. Construir alianzas sociales y articular sociedad civil

Unidas Podemos consiguió resistir contra todo pronóstico un ritmo político y un ciclo electoral extremadamente complejo. No obstante, las bases sociales del espacio siguen siendo demasiado débiles. El Gobierno debe servir para estrechar alianzas sociales mediante la organización de espacios de socialización, tejido social y comunidad. La

sociedad civil organizada debe ser el principal apoyo del Gobierno y, al mismo tiempo, el ‘corrector’ de su agenda. Para ello, necesitamos construir contrapoderes con tiempos y dinámicas propias, ajenas a los ritmos siempre frenéticos del Gobierno y las instituciones.

El proyecto republicano que España necesita

La XII Asamblea Federal lanza un mensaje nítido al conjunto de la sociedad española: Izquierda Unida reafirma y redobla su apuesta por la República. Somos conscientes, como venimos analizando, de que el contexto político en el que afrontamos esta Asamblea es más complejo que el de hace cuatro años, pero eso no nos lleva a abandonar nuestros objetivos, sino a adaptarlos.

¿Cómo mantener, pues, nuestra apuesta de ruptura democrática en tiempos de reflujo? En Izquierda Unida debemos ser capaces de entender la situación paradójica de la izquierda anteriormente descrita como una fortaleza relativa: el poder institucional y gubernamental debe servir para reforzar la lucha social y cultural en aras de una reconstrucción del sentido común en términos democráticos y populares. Desde esta perspectiva, nuestra propuesta republicana es lo contrario a una propuesta maximalista o excéntrica: es una propuesta que conecta con el conjunto de reivindicaciones diversas y las eleva, unificándolas, en nuestro proyecto de país.

En Izquierda Unida ondeamos bien alta la bandera de la República desde nuestro nacimiento, también en los momentos más difíciles para ello, esto es, en los momentos de mayor éxito propagandístico de la monarquía, los partidos del régimen y los medios de comunicación. Sabemos que la monarquía carece de legitimidad, no solo como institución antidemocrática de origen sino por su trayectoria en la historia de España, en última instancia como heredera del franquismo. Reivindicamos con orgullo el acervo republicano en el que se encuentran avances de valor incalculable en la historia de nuestro país.

Sin embargo, no enarbolamos la bandera republicana como un mero acto de reivindicación histórica, sino que conectamos el hilo histórico tricolor con las reivindicaciones actuales que giran en torno a los derechos sociales, la democracia real y una nueva ética cívica. Nuestra propuesta republicana se centra en las condiciones de vida de la ciudadanía porque la República sirve, entre otras cuestiones, para que las familias trabajadoras vivan más dignamente. Conectando con el conjunto de reivindicaciones, problemas y anhelos de la ciudadanía podemos conseguir que esta afirmación pase de un simple eslogan a un proyecto inteligible de país capaz de ofrecer certezas a la ciudadanía partiendo de la realidad concreta y mundana.

El proyecto republicano que defendemos pasa necesariamente por la articulación de la máxima unidad popular posible para conformar un bloque democrático capaz de liderar un nuevo proyecto de país, no como algo reducible a símbolos concretos, sino con vocación de

constituirse en un proyecto hegemónico de radicalidad democrática y participación popular en oposición al modelo de gobierno de las élites reaccionarias que históricamente han dirigido el destino de nuestro país. En este sentido, nuestro proyecto republicano será la consolidación institucional, en última instancia, de un nuevo bloque histórico arraigado en amplias alianzas sociales, políticas y culturales que, compartiendo las líneas centrales del proyecto de país, se dotan de una nueva institucionalidad.

Apostamos por una República Federal y Solidaria que parte del reconocimiento de la plurinacionalidad y el derecho a decidir y la necesidad de un reequilibrio económico, territorial y social. Hay un nexo que conecta a la España plurinacional y la España vaciada y rural: la necesidad de una efectiva descentralización. Apostamos por articular alianzas desde un punto de vista federal y descentralizador no solo como alternativa a la ruptura del marco de organización territorial, sino como necesidad a la hora de desarrollar un proyecto de país más justo, más democrático y más igualitario que no deje a nadie, ni a ningún territorio, detrás.

En este sentido, no podemos pasar por alto la situación dramática que vive la España vaciada y rural. El abandono de la mayor parte del territorio se ha convertido en un problema de Estado. Provoca un grave problema de desequilibrio socio-territorial, supone una desprotección efectiva de los territorios y sus bienes. Conforme los pueblos se vacían, su tejido social va quedando inerte y rendido a multitud de expolios, donde grandes empresas saquean los recursos de la zona en su propio beneficio deteriorando los medios naturales que las personas allí arraigadas han cuidado durante generaciones, con la falsa promesa de futuro para pequeñas zonas. Un medio rural despoblado es un medio desprotegido e ineficaz para custodiar el territorio.

Por ello, en Izquierda Unida entendemos la necesidad, en el marco del nuevo país que defendemos, de poner en marcha una política vertebradora (con todos aquellos servicios públicos necesarios para mantener condiciones de vida digna) y de reactivación económica en las áreas rurales que sea combativa contra la despoblación y sus causas, pasando por un cambio de modelo productivo que vertebre el territorio, que ponga en valor tanto el Patrimonio Natural como el Cultural en todas sus variantes, al mismo tiempo que se protegen sus recursos (hídricos, forestales, del subsuelo o la biodiversidad). Nuestro Mundo Rural debe ser un espacio fundamental para la transición ecológica, poniendo en valor los servicios ecosistémicos que proporciona e impidiendo que se convierta en el lugar que recibe las externalidades de un sistema insostenible.

Izquierda Unida somos la principal fuerza municipalista de este país. Aunque nuestra fuerza se encuentra en los barrios y en los pueblos, no somos municipalistas por estar en los municipios sino porque creemos en un modelo de país en el que en nivel más cercano de las instituciones debe tener un papel primordial. Los municipios, como entidad más cercana a los vecinos y las vecinas, deben tener no solo un aumento de la financiación sino de la

importancia de estos en la propia dinámica del Estado y en la vida política del país. Desde las instituciones de todos los niveles trabajaremos por mejorar la financiación de las administraciones locales y sus competencias. Igualmente, sabemos que los municipios y sus estructuras como la FEMP y otras autonómicas han de ser interlocutores continuos para los establecimientos de cualquier política que les atañen.

Apostamos por una República que defienda los derechos y mantenga viva la memoria de la comunidad en el exterior. España ha sido un país históricamente emigrante, pues las desigualdades y la precariedad (y no un “espíritu aventurero”), así como las persecuciones políticas del franquismo, han expulsado durante décadas a millones de familias trabajadoras a otros países, incidiendo especialmente en el vaciamiento de la España rural e interior. Muchas de ellas esperan la posibilidad de poder retornar algún día a su país y construirse un futuro vital y laboral. Por eso, defendemos una República que cree las condiciones materiales necesarias para que toda persona emigrada que lo desee pueda retornar en condiciones dignas.

La República será feminista o no será

La explosión del feminismo de los últimos años se articula desde un contexto de profunda crisis. La crisis multidimensional del 2008 vino acompañada de un espejismo sobre su resolución, como si fuera un bache a superar para volver a la “normalidad”. El feminismo resistió ese relato ayudando a contribuir con otras miradas posibles, evidenciando su capacidad de poner encima de la mesa otros debates que deconstruyen la idea de progreso, desarrollo y vuelta a la normalidad. Tanto el análisis global como la señalización a la vida cotidiana y la radicalidad de las propuestas hizo que el feminismo fuera una potencia movilizadora y subversiva, convirtiéndose en un grito global a lo largo y ancho del planeta, y ese grito en nuestro país ha sido alto y claro.

La crisis de sentido también ha dado lugar a posturas que niegan la desigualdad y la violencia contra las mujeres, ha puesto en cuestión el concepto de verdad y ha colado el conservadurismo y las ideas de la extrema derecha en todas las capas de la sociedad. Estas respuestas caminan de la mano de una guerra cultural hacia el autoritarismo, reafirman los roles de género tradicionales y la familia nuclear, con el consiguiente impacto y el intento de retroceso sobre nuestros derechos y la naturalización de las desigualdades (derechos sexuales y reproductivos, violencias machistas y sexuales, distribución de los cuidados, etc.).

Ahora con la nueva crisis global que abre la pandemia tenemos nuevos retos encima de la mesa. Se ha puesto de nuevo en cuestión la idea de progreso, pero el espejismo se ha roto, llevándonos a una crisis de sentido que nos roba la idea de futuro. Esta incertidumbre aparece junto al debate sobre la igualdad: el cajón de sastre del feminismo que, por un lado, pone nombre a políticas ineficaces dentro del capitalismo y, por otro, se erige como

utopía ambigua que necesita una resignificación. En este momento en el que ciertas vidas no importan, vemos con más claridad que muchas de ellas no están contempladas en esta 'igualdad' ni tienen acceso a la protección y los derechos (trabajadoras domésticas, trabajadoras de la fresa, mujeres víctimas de prostitución y trata...). Una igualdad sin vidas desechables debe ser un eje que responda a la naturalización de la desigualdad y de la violencia sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, construyendo un futuro anticapitalista y antipatriarcal.

En este gran momento de incertidumbre y de crisis de futuro, el sistema tiene una estrategia hacia la exclusión, la explotación de las más vulnerables y la normalización de la precariedad económica y vital. La reconfiguración de nuevas formas de empleo como el teletrabajo, nos encierra de nuevo en nuestras casas, con peores condiciones de trabajo y aumentando la carga sobre nosotras para reorganizar los hogares, más aisladas y con unos servicios públicos y sociales heridos de muerte. Esta precariedad vital de las mujeres no solo se manifiesta en condiciones laborales sino en la falta de derechos. La Ley de extranjería, la situación de las empleadas de hogar y cuidados o la lacra de la trata y la prostitución son puntos ciegos de la democracia representativa que nos hace ciudadanas de segunda y nos coloca sin recursos en el centro de la explotación y la desigualdad.

Las estrategias que vamos a poder desarrollar desde el feminismo en este nuevo contexto de pandemia van a depender de cómo analicemos la situación actual y nos situemos ante ella para responder. Es el momento de poner encima de la mesa esa alternativa totalizadora del feminismo que empuje –con el antirracismo y el ecologismo– a no desviar el problema de sus raíces y conseguir generar sinergias que potencien la unidad popular y describan esa alternativa en el presente y desde la realidad material.

Es el momento de concretar la potencia acumulada en los años anteriores, construyendo el camino de los cuidados y la reproducción de la vida no solo como una declaración de intenciones o una cuestión ética. El Horizonte del Sistema Estatal de Cuidados es una palanca que se debe articularse como un eje político que identifique las grietas del sistema y que, desde una visión crítica, señale los caminos de protección y despliegue de lo público y lo común hacia el futuro de la sostenibilidad de la vida y el planeta.

Ante este proceso, los poderes económicos y políticos describen su alternativa desde el autoritarismo y la naturalización de la injusticia, desprotegiendo y desechando amplias capas de la sociedad más vulnerable, abocando a la exclusión a las mujeres que ocupan el centro de las contradicciones del capitalismo y el patriarcado.

Mientras, en el feminismo, los debates se enfocan desde la polarización y hacia la ruptura del sentido colectivo, girando las posturas unitarias hacia la identidad y tensionando el feminismo dificultando la continuidad de ese grito global. Las posturas y estrategias sectarias que congelan la potencia del feminismo no resolverán los retos que tenemos por

delante. Desde la fuerza del ‘programa, programa, programa’ y la apuesta de la unidad popular, debemos luchar por la hegemonía a la vez que somos agentes de despolarización y marcar la vía de un feminismo de clase, trans inclusivo y abolicionista de la prostitución y de los vientres de alquiler. Queremos construir feminismo y no hacer el trabajo de ruptura que tan beneficioso es para el sistema y la extrema derecha.

5. Reforzar Izquierda Unida para fortalecer los espacios de convergencia

En la etapa anterior analizábamos los errores que entendíamos que habíamos realizado en el desarrollo de Izquierda Unida como movimiento político y social. Hacíamos un balance autocrítico de los últimos 30 años, pero destacábamos las fortalezas y los grandes aciertos que habíamos tenido. A raíz de ese análisis en los últimos cuatro años hemos introducido cambios importantes que han mejorado el carácter de Izquierda Unida como movimiento político y social y han permitido que la organización soporte un ciclo político convulso y que afrontáramos en unas condiciones no favorables.

Estos cambios organizativos se correspondían con unas tesis políticas que planteaban la necesidad de tener más capacidad de intervención en la sociedad, para no solo obtener más representación electoral sino para mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Para ello entendíamos que el trabajo en espacios unitarios y en luchas concretas nos fortalecía como organización y nos permitía construir unidad popular desde lo concreto. En este trabajo era evidente que necesitábamos ser coherentes, hacer lo que decíamos o, si se prefiere, ser lo que decimos ser: clase y pueblo.

El trabajo realizado ha sido enorme y a continuación detallaremos elementos esenciales que hemos cambiado en nuestra organización. Sin embargo, no podemos obviar que debido al ciclo político la mayoría de nuestros esfuerzos se han volcado en lo electoral y en lo institucional y por lo tanto el trabajo en el conflicto social, la construcción de tejido social y de proyectos de vida en nuestra cotidianidad política son elementos a los que no hemos podido dedicar ni el tiempo ni los recursos suficientes. Ubicamos como prioridad política la necesidad de construir organización con el pueblo, una organización que se fortalezca en clave de movimiento político y social porque es útil en nuestros ámbitos de actuación, en los barrios, en los municipios, en las ciudades y en los centros de trabajo.

Una de las tareas de IU hoy en día vinculada a su espíritu fundacional es generar espacios de unidad para el conjunto de la izquierda, a los que aportar nuestro bagaje, nuestra experiencia y nuestras señas de identidad.

Lejos de discursos netamente identitarios, estamos llamados a dotar de fortaleza social y política al espacio de unidad popular y para lograrlo es necesario poner en valor nuestro bagaje, poner en valor a IU, el valor de su propuesta programática, de su capacidad organizativa y su cultura militante y con ello podremos desplegar toda su capacidad.

Esta apuesta requiere de mucho esfuerzo, generosidad y honestidad colectiva que asumimos, sin perder de vista que, en cualquier caso, lo que está en juego es construir un espacio amplio transformador que sea útil para los y las trabajadoras de este país, que sea algo más que una coalición electoral y su resultado institucional.

Avances realizados en el anterior mandato hacia una IU más movimiento político-social

- Mejora de los mecanismos de participación democrática y transparencia: referéndums, revocatorios, primarias... Este trabajo ha asentado una cultura organizativa más sólida y más participativa, hemos generado nuevos derechos de la militancia que hoy en día forman parte de la cultura organizativa de Izquierda Unida. Podemos asegurar que el conjunto de la militancia ha podido decidir en los momentos más importantes, sin embargo, hemos de mejorar en el establecimiento de procesos de debate previos que nos permitan que los procesos de referéndum tengan un debate más amplio. Es obvio que los tiempos y las circunstancias no lo permitirán siempre, por lo que debemos acompañar mejor las diferentes dinámicas de los tiempos políticos.
- Austeridad económica en aras de una mayor independencia política y económica y una mayor optimización de los recursos. La reducción de la deuda, la contención del gasto, el establecimiento de un salario máximo, la transparencia económica y la rendición de cuentas nos han permitido mejorar la viabilidad política y económica de Izquierda Unida. Los próximos años deberemos conseguir reducir el gasto de recursos en el pago de deuda y volcar muchos más recursos en el trabajo político externo.
- Adecuación de los órganos para que respondan a las características de un MPS tanto en metodología, para que sea más participativa y eficaz a la hora de conjugar el análisis, debate y la acción, como en su composición, de manera que permita una mejor representatividad y coordinación entre los pilares que conforman el MPS (político, social y territorial). La experiencia nos demuestra que no tiene sentido tener tres órganos superpuestos y en algún caso, sobredimensionados, lo que nos debe llevar a tener órganos más especializados en sus tareas y mejor dimensionados. Este punto no lo hemos logrado completamente y por lo tanto será una de las cuestiones a mejorar en el próximo mandato con medidas concretas.
- Una organización más federal y con más participación de los partidos y organizaciones que la integran. Izquierda Unida hoy es más federal y más coherente, se han puesto en

marcha los mecanismos para evitar incumplimientos de acuerdos federales o vulneraciones de los derechos de los y las afiliadas.

- Puesta en marcha de redes de activistas como espacios de participación, elaboración y acción colectiva y conexión con el ámbito activista de la sociedad civil. El ejemplo de la lucha de las pensionistas, del movimiento feminista, del movimiento ecologista o por la sanidad pública y los servicios públicos han aportado durante el mandato anterior una experiencia muy valiosa y nos ha hecho crecer como organización en el conflicto. El trabajo realizado por las redes ha permitido conquistas sociales que se han concretado en mejoras en la vida de las familias trabajadoras.

Lógicamente cualquier avance hacia cambios profundos en nuestra organización requiere tiempo a partir del desarrollo de nuevas dinámicas culturales y de trabajo. En estos últimos años se han producido algunas resistencias internas, pero el desarrollo de un movimiento político y social pasa necesariamente por la articulación de medidas de participación de la militancia y de nuestro entorno social. Proponemos seguir avanzando en el camino de la democracia participativa mejorando las medidas implementadas hasta ahora y articulando nuevas propuestas.

Reforzar Izquierda Unida como movimiento político y social insertado en la sociedad civil

Si hemos analizado brevemente los aciertos del anterior mandato es precisamente para valorar si los cambios implementados nos han permitido generar una Izquierda Unida más movimiento político y social, más democrática y, por lo tanto, más fuerte y cohesionada. Gracias a ese trabajo hemos superado un tiempo extremadamente complicado y nos ubicamos con posibilidades de afrontar los retos políticos de nuestro país. Por lo tanto, cuando hablamos de reforzar Izquierda Unida no lo hacemos desde un planteamiento que se realice en clave interiorizada; el fortalecimiento se produce no solo por el trabajo organizativo, sino sobre todo porque nuestro trabajo político sea útil para nuestro pueblo y se reconozca a Izquierda Unida como una organización política útil con capacidad de mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras.

Ser útiles para nuestro pueblo y nuestra clase no es solo una cuestión institucional, debería ser sobre todo una cuestión social de intervención en nuestros ámbitos territoriales y sectoriales. Pongamos dos ejemplos. En primer lugar, las sedes. Izquierda Unida puede tener muchas sedes, pero si esas sedes no tienen actividad social (y no solo política en términos estrictos) no serán útiles para nuestro pueblo. Las y los representantes públicos de nuestro municipio no necesitan una sede para atender a los y las vecinas, sin embargo, si nuestras sedes son espacios útiles donde la juventud puede reunirse o estudiar, donde se puede ver un partido de fútbol o cualquier otra actividad lúdica, seremos útiles y nuestras sedes serán espacios populares de vida. Otro ejemplo más actual. Pensemos en quién

consiguió que no se retrasase la edad de jubilación o se modificase la legislación de pensiones. ¿Acaso fue nuestra presencia en el parlamento? ¿O fueron las movilizaciones de las y los pensionistas las que crearon las condiciones para que no fuese posible tocar las jubilaciones? La acción institucional es fundamental, pero debe acompañarse con una lucha social que es imprescindible. Nuestro trabajo, desde nuestra mera presencia en barrios, pueblos y ciudades, debe estar enfocado a crear esa doble condición de posibilidad: institución y calle.

¿Qué Izquierda Unida?

- Una izquierda de clase orgullosa de su bagaje histórico y que, al mismo tiempo, se inserta dentro de un bloque político más amplio y diverso. Es necesario articular y desarrollar el trabajo externo fuera de la dinámica institucional, es necesario implementar propuestas concretas que hagan de las sedes lugares de referencia útiles para nuestra clase y nuestro pueblo. Otro elemento importante es el refuerzo de una formación teórica y práctica continua mediante planes de trabajo concretos.
- Una izquierda que cuida a su gente, que se cuida. La afiliación a veces se entiende como un sacrificio, casi desde una perspectiva cristiana y militar. Si no conseguimos que la militancia sea algo más que sacrificio abnegado por un futuro mundo no seremos capaces de generar espacios amables donde crear comunidad. La izquierda se debe caracterizar por construir en el día a día proyectos alternativos de vida frente al proyecto de muerte que ofrece el capitalismo. En vez de prometer un paraíso futuro debemos construir una nueva cotidianidad, un proyecto de vida entre todos y todas cada día: el bosquejo concreto y mundano de la nueva sociedad socialista a la que aspiramos. En el próximo mandato pondremos en marcha programas de afiliación específicos para nuestros mayores, para las personas jóvenes y para el conjunto de la afiliación. Para ello crearemos una responsabilidad de afiliación.
- La creación de comunidad no solo la hacemos con nuestra afiliación, también la construimos con nuestro entorno social y con nuestra gente. Hasta ahora hemos avanzado en la figura del simpatizante, sin embargo, la actividad del simpatizante se limita a la participación en procesos de primarias o de referéndums. Debemos incrementar la participación de los simpatizantes, pensando que algún día podrán ser militantes de Izquierda Unida. La participación en redes de activistas que se centren en el trabajo sectorial debería ser una oportunidad para ampliar la participación de los simpatizantes. En ese sentido, en el próximo mandato potenciaremos la figura del simpatizante adscrito a las redes y áreas sin adscripción local.
- Una Izquierda Unida que conecte la acción institucional con la estrategia política del conjunto de la organización en todos los niveles. En el próximo mandato recuperaremos la comisión interparlamentaria anual donde la Colegiada Federal se reunirá con el

conjunto de europarlamentarios, diputados nacionales, diputados autonómicos y alcaldías.

- Una izquierda con arraigo territorial y fortaleza municipal para insertarse en la cotidianidad de la clase trabajadora más allá de los estrecheces del institucionalismo. El refuerzo del trabajo de las Asambleas de base y el énfasis en el trabajo municipalista es uno de los retos del próximo mandato. Pondremos en marcha elementos de coordinación del ámbito municipal y que permita vincular el conjunto de la actividad institucional con nuestra base territorial. La intervención en los municipios no debe ser exclusivamente institucional y la coordinación deberá enfatizar el conocimiento de buenas prácticas a nivel municipal para reforzar y ampliar nuestra fuerza municipal.
- Una izquierda centrada en la articulación de sociedad civil, en la organización de los conflictos sociales y en la creación de espacios de socialización, que se sirva de las redes para conectar con los universos activistas. En los próximos años desarrollaremos las redes de activistas como el pilar social de la organización y la conexión con los conflictos. Para ello es necesario que se configuren como instrumentos flexibles de participación, elaboración, acción colectiva y formación con implantación en la base, participación plural y no como secretarías constituidas desde arriba. Para ello es necesaria la dotación de recursos y la planificación de trabajo de las redes. Organizaremos un encuentro anual de las redes de activistas que nos permitan compartir las experiencias y poner en marcha nuevas iniciativas será un objetivo concreto de la dirección. El encuentro será operativo si el objetivo es avanzar en trabajo conjunto y no solo exponer las diferentes propuestas sobre las que trabajamos. Partir de las necesidades sociales y generar una propuesta que integre todas las perspectivas. En dicho encuentro se deberían definir las propuestas prioritarias de movilización social y crear redes temporales para desarrollarla, coordinarla e impulsarla.

Hace dos años en la ‘Asamblea por un nuevo modelo organizativo’ afrontamos el debate de las redes y las áreas. Fue un debate rico y extenso que nos permitió aclarar conceptos y apostar con claridad por las redes de activistas como grupos de trabajo y espacios de articulación del conflicto y de la movilización social que superan la elaboración colectiva y el trabajo con la institución. Esa apuesta no niega el enorme trabajo que han desarrollado las áreas de elaboración colectiva en la historia de nuestra organización, sin embargo, aprobamos que la convivencia de ambas estructuras sería temporal. Recordemos el preámbulo del reglamento de las redes y de las áreas: “*Tras aprobar en la XI asamblea Federal la creación de las redes de activistas, es imprescindible que nos dotemos de un proceso de transición que nos permita diseñar una sola estructura que integre las dos patas de trabajo –elaboración política y activismo–. Asimismo con la voluntad de que el MPS no tenga una estructura complicada, con duplicidad de competencias deberemos esforzarnos para que en este*

proceso de transición las redes sean espacios que integren todo el capital humano y las relaciones tejidas con los MMSS que han ido creando las áreas en los distintos frentes externos, de tal manera que al concluir este proceso de transición tengamos un espacio de trabajo inclusivo y útil para el objetivo de reforzar la IU MPS”.

Creemos que es necesario fijar un tiempo para finalizar la duplicidad de estas estructuras, por lo tanto planteamos que la primera Asamblea de Activistas que se celebre apruebe un calendario concreto.

Para desarrollar este trabajo de las redes es necesario más coordinación, transparencia y participación con las áreas/redes. Durante la pandemia, el trabajo de las áreas y redes ha puesto de manifiesto la gran capacidad de aportar propuestas y mejoras al escudo de protección social para la clase trabajadora. Siguiendo ese espíritu de colaboración y elaboración colectiva creemos que es fundamental volver a mapear nuestra presencia política en los diferentes niveles (Unidas Podemos, Parlamento, Ministerios, Europa...) y tratar de aterrizar una metodología de trabajo clara, ágil y flexible que permita desarrollar propuestas participadas, mejorar la transparencia en la toma de decisiones y facilitar información en los diferentes espacios políticos.

Para materializar las propuestas de IU en iniciativas legislativas necesitamos tener reuniones periódicas y mecanismos de trabajo donde las áreas/redes estemos presentes en los procesos legislativos y parlamentarios. En resumen, debemos dotarnos de tiempos y espacios para generar sinergias entre las redes y el ámbito institucional para:

- Recibir información digerida (argumentarios, resúmenes) borradores de leyes/ estrategias/planes y campañas desde los distintos ámbitos institucionales para poder hacer aportaciones más fácilmente.
 - Identificar los temas que generan dudas o contradicciones para generar un espacio colectivo de toma de posiciones y consensos.
 - Tener mecanismos de trabajo establecidos con todas las patas de IU (incluidas las áreas/redes) para evitar la descoordinación y el desconocimiento de nuestro trabajo y potenciar la elaboración colectiva.
 - Desarrollar mecanismos de coordinación y trabajo en temas que sean transversales a distintas áreas para llevar los consensos y la visión global de IU al trabajo institucional.
- Una Izquierda Unida que, desde un férreo compromiso con la creación de dinámicas de trabajo democráticas y fraternas no renuncia a su vocación hegemónica dentro del espacio de la izquierda transformadora.

- Una Izquierda Unida con una apuesta por el internacionalismo, no como declaración, sino como práctica política diaria. La división internacional del trabajo, la erosión de las democracias liberales-representativas, el camino hacia el autoritarismo y la estrategia de desechar a los países y clases más vulnerables, es una lucha global que articula nuestro proyecto de país hacia la redefinición del sistema mundo.
- Una izquierda volcada en el trabajo externo, una Izquierda Unida que elabore colectivamente y actúe en la realidad concreta para transformarla. En el anterior mandato planteamos la necesidad de adecuar los órganos pero, como ya hemos valorado, no lo conseguimos completamente y se reprodujeron dinámicas similares a las de anteriores mandatos. Haremos efectiva la propuesta de limitar los órganos a dos niveles. En este sentido se simplificará el funcionamiento de la organización, en todos los niveles solo habrá dos órganos, la colegida y la coordinadora. Este órgano debe corresponder a las características de un MPS tanto en metodología como en su composición, las Asambleas Político y Sociales serán asambleas de rendición de cuentas y de elaboración de propuestas, donde se deberá ampliar la participación de redes y áreas e incluso de movimientos sociales y sindicales que quieran participar.-La Asamblea Político y Social no será un órgano “regular” de IU sino de participación y trabajo, que ayude al desarrollo del carácter de MPS de IU, tendrá una composición en base a la representación de los tres pilares que conforman el MPS, se dotará de un reglamento propio y una Mesa Permanente que coordinará sus trabajos y asegurará trasladar sus conclusiones a los órganos regulares de IU.
- Una izquierda más flexible y receptiva a las diversas sensibilidades e inquietudes del conjunto del espacio progresista. La participación de los partidos, el respeto de la federalidad y de la pluralidad, el trabajo en redes de activistas y el principio de democracia participativa, que desarrolla el principio de que el poder reside en la afiliación, son las características que hacen de Izquierda Unida un movimiento político y social que aúna la lo mejor de las tradiciones políticas organizativas: la pluralidad ideológica de las coaliciones, la eficacia de las estructuras de partido y la horizontalidad y participación de los movimientos populares.
- Una izquierda más rejuvenecida, más feminizada y feminista y con una mayor diversidad de perfiles socioculturales y territoriales. Es imprescindible que la incorporación de personas jóvenes y de mujeres se realice a todos los niveles, no solo en los ámbitos superiores.
- Una IU Feminista. Izquierda Unida ha avanzado, en el último periodo, en implementar herramientas feministas para la organización. Aún así, sigue pendiente de poner en marcha de la anterior asamblea el protocolo de acoso sexual, la comisión federal de cuidados y el observatorio feminista. Es necesario seguir desarrollando estas herramientas para avanzar hacia una organización feminista.

Fortalecer los espacios conjuntos de convergencia

De la coalición electoral a la unidad popular. Después de cuatro años de trabajo unitario en todos los niveles, desde la calle a las instituciones, el balance no es, en líneas generales, positivo. Es cierto que se ha construido una coalición estable pero no se ha asentado una base popular y territorial que sostenga la coalición. Es evidente que construir Unidad Popular es un proceso mucho más profundo que garantizar la estabilidad de Unidas Podemos, pero es obvio que Unidas Podemos es hoy en día la única base sólida que tenemos. Desde 2015 muchas de las confluencias municipales que consiguieron vuelcos en los Ayuntamientos más importantes han desaparecido, a pesar de los esfuerzos de Izquierda Unida por consolidar estos espacios e incluso para evitar divisiones.

Por lo tanto, es imprescindible que desde el conocimiento de la realidad actual Izquierda Unida siga apostando por los procesos unitarios populares y a la vez proponga al conjunto de los actores que componen Unidas Podemos unas medidas que permitan democratizar el espacio para hacerlo más sólido empezando por priorizar que haya una coordinación interna similar a la de una coalición, con funcionamiento realmente democrático, para después plantearnos la posibilidad de espacios más extensos de participación. Para ello, proponemos medidas concretas que puedan orientar la estrategia del conjunto de la organización a todos los niveles durante el próximo mandato:

- Apuesta por un espacio conjunto que crezca y no se reduzca. Uno de los objetivos del espacio unitario debe ser su búsqueda permanente de ampliarse y fortalecerse con otras organizaciones y, fundamentalmente, mediante la incorporación de colectivos y personas no organizadas. Izquierda Unida aporta desde su coherencia y ejemplo la necesidad de ampliar el espacio actual de Unidas Podemos y profundizar la unidad para que esta no solo sea electoral. Es necesario que se antepongan los intereses del pueblo a las dinámicas identitarias de las organizaciones políticas.
- Por un espacio conjunto con mayor fortaleza organizativa. Mecanismos efectivos de participación democrática, deliberación y toma de decisiones. A la hora de adoptar acuerdos deben regirse preferentemente por medio del consenso. Primándose la síntesis y el diálogo y dotándose de mecanismos democráticos para resolver cuestiones en las que no se pueda alcanzar el consenso. Los mecanismos de coordinación deben respetar la autonomía de todas las partes integrantes.
- La puesta en marcha de coordinaciones entre organizaciones a todos los niveles es imprescindible, al igual que la posibilidad de articular debates o consultas para la toma de decisiones importantes. Trabajaremos la articulación de normas que ayuden a

regular la convivencia política, la actividad institucional y la cooperación entre organizaciones:

- El desarrollo de estos espacios de coordinación debe ser tan amplio como sea posible pero flexible en su desarrollo, adaptándose a la realidad política y a los actores existentes. y con una cobertura de mecanismos de mediación y solución de conflictos integrada y normalizada dentro de las estructuras.

El objetivo no es alcanzar necesariamente una unidad orgánica y/o electoral con todos los actores... Lo primordial es ser capaces de encontrar unos mínimos comunes para generar una agenda política propia y conjunta. Que se perciba por la ciudadanía que hay un espacio diverso con un discurso y unas prioridades compartidas.

- Se buscará que la portavocía y referencialidad sea colegiadas.
 - Organizar y coordinar bien y de forma abierta esta forma de funcionamiento debe asegurar la unidad de acción entorno a las propuestas políticas acordadas, así como el derecho de cada formación para mantener posiciones propias en el resto de cuestiones, de manera que ninguno de quienes conformemos la confluencia tengamos que renunciar a plantear públicamente propuestas e iniciativas que define nuestro perfil político.
- Por un espacio conjunto con mayor implantación territorial. Trabajo codo a codo desde la base: barrios, municipios, ciudades y federaciones y espacios sectoriales de lucha. Estos espacios deberían tener un carácter más flexible, tener como prioridad el trabajo conjunto por la base.
 - Por un espacio conjunto con mayor vinculación con la sociedad civil. Conexión de los recursos institucionales con el trabajo en la calle, en los conflictos y con el activismo.

En los distintos niveles territoriales se establecerán asambleas abiertas en las que de forma periódica se rinda cuenta de la acción institucional de los cargos públicos y gobiernos del movimiento político y social siempre abiertos a la participación del pueblo.

Se establecerán espacios que permitan el desarrollo y actualización de los elementos programáticos.

- Nuestro objetivo debe ser que la base social del espacio esté compuesta no solo por los militantes y simpatizantes del entorno político del bloque de Unidas Podemos, sino también de otros sujetos a la izquierda del PSOE así como de aquellos movimientos nacionalistas de izquierda con interés en la democratización del Estado y el avance de los derechos sociales. Esta base social se ampliaría también con aquellas personas

militantes o afiliadas a los sindicatos de clase, asociaciones vecinales, feministas, de jóvenes, organizaciones en defensa de los consumidores, del medio ambiente, plataformas con objetivos concretos, etc., además de estas mismas organizaciones como tales.

El objetivo estratégico es construir movimiento popular, mediante el reforzamiento y ensanchamiento del bloque contra hegemónico heredado de la década anterior a través del reagrupamiento y la organización de los sectores mencionados anteriormente mediante la agitación, la comunicación y la movilización de estos en relación con campañas vinculadas a objetivos concretos. Estos objetivos concretos han de ser coherentes con la mejora de las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora y capas populares (explotación laboral, pensiones, suministros básicos, servicios públicos, etc.) así como con la recuperación de los derechos civiles y políticos (derogación de las leyes mordaza, reforma penal, muerte digna, antirracismo, memoria histórica, política migratoria y de asilo, derechos LGTBI, lucha contra el maltrato animal, etc...).

Estos son algunos de los elementos que planteamos para fortalecer los espacios conjuntos de convergencia actuales como base política de una unidad popular con arraigo en la sociedad civil, tal y como ya señalábamos en la XI Asamblea Federal. Reafirmamos nuestra propuesta y la adecuamos a una nueva realidad política que, no obstante, sigue haciendo del fortalecimiento de la convergencia y la unidad popular una propuesta imprescindible de carácter estratégico.